

JUSTICIA ELECTORAL DE GÉNERO: CONSTRUIR DEMOCRACIAS PARITARIAS, SUSTANTIVAS E INCLUYENTES

GENDER ELECTORAL JUSTICE: BUILDING PARITY, SUBSTANTIVE AND INCLUSIVE DEMOCRACIES

AUTORA: FLOR ANGELI VIEYRA VÁZQUEZ¹

INTRODUCCIÓN

La unión intrínseca entre ciudadanía y régimen democrático se expresa a través del ejercicio de los derechos políticos de las personas, sin embargo, diversos estudios feministas e interseccionales han demostrado que la igualdad jurídica entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos político-electorales aún presenta serios desafíos.

En México, la paridad como principio constitucional representó una modificación trascendental en la consolidación de la democracia, potenciando la participación y representación política de las mujeres, no obstante, su materialización ha implicado múltiples retos para las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Hacer real la paridad implica no sólo mirar las diferencias en el acceso y ejercicio del poder político entre mujeres y hombres sino también, analizar las diferencias que existen en los múltiples contextos en que viven y hacen política las mujeres.

Esta investigación presenta una reflexión sobre el cruce entre derechos humanos, democracia, ciudadanía, género y feminismos como una apuesta por construir una democracia igualitaria, sustantiva e incluyente y, bajo estas características, impulsar una justicia electoral en materia de género que logre transitar de una cultura de la legalidad a una cultura de la constitucionalidad. Las decisiones jurisdiccionales juegan un papel determinante para impulsar el avance o el retroceso de los derechos de las mujeres, de ahí la importancia del actuar de las y los jueces.

Es necesario continuar reflexionando cómo mejorar la democracia constitucional, en su ámbito procedimental (reglas de *quién* y *cómo* acceder al poder político) hasta su ámbito sustancial (garantía de derechos humanos para los y las ciudadanas, así como la separación de poderes). El inminente tránsito hacia una cultura de la constitucionalidad a través del género, requiere analizar las sentencias desde una epistemología feminista, antirracista y

¹Maestra en Estudios de la Mujer (UAM-X) y Licenciada en Ciencia Política (UAM-I). Actualmente estudia el Doctorado en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, es docente en la ENTS de la UNAM y asistente de investigación del Doctorado en Estudios Feministas (UAM-X).
Correo electrónico: angelivieyra@gmail.com

descolonial (Bartra, 2012, 1998; Espinosa, 2014; Curiel 2007), recuperar nuestra humanidad (racionalidad, voluntad y emociones), implica cambiar la visión patriarcal del derecho y recuperar su dimensión emotiva (Narváez, 2017: 66-77). El trabajo de las y los jueces tiene un papel fundamental en este cometido.

1. Derechos humanos y democracia y ciudadanía

En *El tiempo de los derechos*, Norberto Bobbio afirmaba: “el reconocimiento y la protección de los derechos humanos están en la base de las Constituciones democráticas modernas” (Bobbio, 1991: 14) y sostenía que “sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia; sin democracia no existen las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos” (Bobbio, 1991: 14). En éste, nuestro tiempo, es decir, treinta años después de estas afirmaciones, el análisis del vínculo entre democracia y derechos humanos mantiene su vigencia, adquiriendo particular relevancia en aquellos contextos donde éstos últimos se encuentran constantemente amenazados o restringidos para algunas personas y, en consecuencia, la democracia corre el riesgo de convertirse en una mera apariencia.

Desde diversas áreas del conocimiento científico, se han realizado importantes investigaciones para indagar si los seres humanos poseemos una moral innata, resultado de procesos evolutivos que permitieron el surgimiento de sociedades, o si, por el contrario, nuestra propensión a cometer actos correctos e incorrectos son parte de nuestra socialización.² La discusión continua abierta, sin embargo, es preciso recordar que los derechos humanos tal como los concebimos en la actualidad, nacieron, paradójicamente, como consecuencia de una “manifestación de nuestra deshumanización, justo después de lograr aniquilar al ser humano apoyándose en él” (Narváez, 2018: 175). Los efectos de los regímenes totalitarios dan cuenta de ello. Los derechos humanos, constituyen, de alguna manera, un límite a la latente autodestrucción humana.

² Véase. Cortina, Adela, 2013. “La conciencia moral: entre la naturaleza y la autonomía”, *Cuadernos Salmantinos de filosofía*, Vol. 40, Salamanca. Universidad Pontificia de Salamanca: 249-262. En este trabajo, la autora da cuenta de diversas investigaciones que, desde la biología evolutiva, la filosofía, la sociología y la genética han buscado explicar el origen y fundamento de la moralidad en los seres humanos.

En la actualidad nos encontramos frente al exceso discursivo de los derechos, “casi todo puede ser traducido en términos de un derecho subjetivo”³ (Narváez, 2018: 175), sin embargo, el desafío implica llevarlos a la práctica. Éste es el punto de intersección donde cobra relevancia el vínculo con la democracia, en particular, con un modelo de democracia constitucional, concebida, siguiendo la lectura de Bobbio, como un régimen que se encuentra fundado en el ejercicio de los derechos políticos y el permanente respeto de los derechos fundamentales donde, además, las decisiones tomadas por la mayoría siempre deberán respetar los derechos fundamentales de la minoría (Córdova, 2007: 64) de ahí que, “la función esencial de los llamados derechos fundamentales y de libertad o derechos humanos y civiles que están garantizados en todas las Constituciones de las democracias parlamentarias modernas es la protección de la minoría” (Kelsen citado en Garzón, 1989).

Vale la pena hacer una precisión respecto a las categorías de derechos humanos y derechos fundamentales. Como señala Michelangelo Bovero: “El tipo de derechos designado por el lenguaje común como «derechos humanos» corresponde genéricamente a los derechos que el iusnaturalismo político moderno, fundamento filosófico originario del constitucionalismo, llamaba naturales” (Bovero, 2013: 28). Ambos reivindican una validez universal, sin embargo, la diferencia radica en que la validez de los derechos humanos ya no es sólo moral, como en los derechos naturales, sino también jurídica, fundamentada en el derecho positivo. Esto es así a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Bovero, 2013: 28).

Ahora bien, los derechos fundamentales se caracterizan por ser: universales; inalienables; indisponibles; son derechos “contra el mercado”, es decir, no pueden ser comprados ni vendidos; son también derechos “contra el Estado” en tanto que ningún poder político puede disponer de los derechos fundamentales de los individuos; y no son consecuencia de una cierta clase de deberes, sino que, por el contrario, son fundadores de una cierta clase de deberes. Los derechos fundamentales “son tales no ya porque tengan un

³ Michelangelo Bovero señala que un derecho subjetivo se encuentra completa y propiamente garantizado si además de la garantía primaria se establece también una garantía secundaria, es decir, si su titular puede recurrir a un poder constituido autorizado y con facultades para tutelarlos (también) de forma coactiva frente a una violación del propio derecho. Ver: Bovero, Michelangelo, 2013, *La protección supranacional de los derechos fundamentales y la ciudadanía*, México: Cuadernos de divulgación de la justicia electoral-TEPJF: 24-25.

fundamento (metajurídico: metafísico o moral), sino porque son concebidos como fundamento de todo orden jurídico-político establecido en las cartas constitucionales”. (Bovero, 2016: 16-20). Con base en lo anterior, una Constitución (moderna) sería aquella norma fundamental que tenga dos dimensiones: a) otorgar derechos fundamentales, universales e inviolables y b) instituir poderes cuyo ejercicio respete y verifique la efectividad de dichos derechos, siendo éstos las condiciones sustanciales de legitimidad de los propios poderes” (Bovero, 2013: 22).

Como podemos observar, existe un vínculo estrecho entre derechos humanos y democracia, siempre y cuando entendamos a ésta última como la suma de determinados derechos fundamentales que constituyen, al mismo tiempo, la protección contra sí misma, además, es un “tipo de régimen en el cual todos los individuos vinculados por las decisiones colectivas son titulares, en igual medida, de los derechos de participación política” (Bovero, 2016: 28). En suma, la democracia es un régimen en el que “las decisiones colectivas [...] son fruto de un proceso decisonal que brota desde abajo, en el que *todos* (los destinatarios de las decisiones colectivas) tienen derecho a participar de manera igual e igualmente libres [...] es el régimen de igualdad y libertad política (Bovero, 2008: 219).

A partir de las características antes señaladas, es necesario precisar cuáles son las *condiciones* que, de acuerdo con Bobbio, requiere una democracia:

- 1) todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, religión, condición económica y sexo, deben disfrutar de derechos políticos, es decir, cada uno debe disfrutar del derecho de expresar la propia opinión y de elegir a quien la exprese por él;
- 2) el voto de los ciudadanos debe tener el mismo peso;
- 3) todos los que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres para poder votar según la propia opinión, formada lo más libremente posible, en una competición libre entre grupos políticos organizados, en concurrencia entre ellos;
- 4) deben ser libres también en el sentido de que deben ser puestos en la condición de elegir entre soluciones diversas, es decir, entre partidos que tengan programas diversos y alternativos;

- 5) tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas, debe valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere electa o se considere válida la decisión que obtenga el mayor número de votos;
- 6) ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, particularmente el derecho a convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones (Bobbio 2009, 460).

Como podemos apreciar, las dos primeras reglas establecen las condiciones de la igualdad democrática: la primera regla impone una condición de igualdad como inclusión (toda la ciudadanía, sin distinción alguna deben gozar del derecho-poder de contribuir a las decisiones colectivas); la segunda regla impone una condición de igualdad como equivalencia, es una condición de equidad (todos los votos deben valer por igual). Las siguientes dos establecen las condiciones de libertad democrática: la tercera regla impone una condición de libertad subjetiva, *pluralismo informativo* (sin el cual las opiniones políticas de los ciudadanos pueden manipularse); la cuarta regla impone una condición de libertad objetiva, *pluralismo político* (los ciudadanos deben poder elegir entre distintas alternativas reales); la quinta regla impone una condición de eficiencia de todo el proceso de decisión colectiva, es decir, de la democracia, representa la regla de la mayoría, (permite llegar más fácilmente a la decisión colectiva frente a la heterogeneidad de opiniones individuales); y la sexta, no es propiamente una regla de procedimiento sino de contenido de las decisiones, es, la condición de salvaguardia o de supervivencia de la democracia (es una limitación al propio poder de la mayoría) (Bovero, 2008; Salazar, 2013).

Todas ellas, constituyen las reglas preliminares que posibilitan el desarrollo del juego democrático son, como se ha advertido anteriormente, *las condiciones* de la democracia. Sin embargo, es importante señalar que para que éstas sean posibles requieren de forma indispensable, de ciertas *precondiciones*, conocidas como las cuatro libertades de los modernos: libertad personal; libertad de opinión y manifestación del pensamiento; libertad de reunión; y libertad de asociación. Todos estos derechos de libertad “deben considerarse inviolables e inalterables por parte de cualquier órgano decisorial de un ordenamiento democrático” (Bovero, 2008: 222) pues, de lo contrario, la democracia sólo sería una apariencia.

Este concepto formal de democracia y la insistencia por integrar derechos sociales como precondiciones de la democracia, abrió la puerta a una concepción sustancial de la misma, es decir, a la configuración de la democracia constitucional. Por democracia constitucional podemos entender:

“La forma de gobierno en la que los órganos del poder democrático, además de encontrarse articulados según el principio de separación y/o división, están explícitamente vinculados en su actuación por la norma constitucional, que las obliga al respecto y a la garantía también de los otros derechos fundamentales, en primera instancia los derechos de libertad y los derechos sociales” (Salazar, 2013: 36).

Al respecto, para entender los derechos sociales como precondiciones de la democracia, es necesario retomar, de manera breve, las posturas de autores que si bien, sus propuestas presentan ciertas diferencias, son coincidentes en reconocer la importancia de este conjunto de derechos como requisitos mínimos, para una vida digna.

Comencemos por Ernesto Garzón Valdés, quien considera que existe una vinculación conceptual entre la democracia representativa y el «coto vedado». El «coto vedado» incluye aquellos derechos que se encuentran vinculados con la satisfacción de los bienes básicos y que éstos a su vez, constituyen una condición necesaria para la realización de cualquier plan de vida. Los bienes básicos o «necesidades básicas», pueden dividirse en dos tipos: a) necesidades básicas “naturales” como: comer, contar con una vivienda, tener vestido, entre otros. Éstos, son necesarios para asegurar la supervivencia humana y por lo tanto son los mismos en todas las sociedades; y b) necesidades básicas “derivadas” como: saber leer y escribir, que tienen la característica de ser expansivos y cambiantes de acuerdo con los tiempos y las sociedades. Garzón Valdés reconoce que, pueden ocasionarse conflictos debido a la imposibilidad de satisfacer dos o más derechos básicos al mismo tiempo o por la carencia de recursos económicos suficientes, (Garzón, 1989: 209).

En suma, esta reinvención lingüística del coto vedado se utiliza para indicar el “conjunto de principios y/o reglas básicas de rango constitucional que ningún poder político constituido, ni siquiera aquél de la mayoría en los Estados democráticos de derecho, puede violar” (Bovero 2008, 218). En el coto vedado se encuentran los derechos individuales fundamentales.

Por su parte, Luigi Ferrajoli ha denominado «esfera de lo indecible» o «de lo no decidable», para referir al conjunto de derechos que no se someten a discusión, sino que el Estado tienen la obligación de garantizarlos (Ferrajoli, 2014: 87).

En el mismo sentido, Bovero sostiene que, entre las precondiciones de la democracia, se deben incluir también algunos derechos sociales, ya que constituyen las precondiciones a los derechos de libertad democrática. Entre estos derechos sociales que se deben considerar se encuentran: a) el derecho a la instrucción, es decir, el derecho a la educación ciudadana cuyo fin radica en asegurar a las personas las condiciones objetivas para una elección libre; b) el derecho a la subsistencia, esto implica que todas las personas dispongan de un mínimo de recursos asegurados para la existencia, con el objeto de evitar que el derecho al voto pueda correr el riesgo de adquirir una dimensión económica, es decir, que puedan venderse y comprarse los votos, ya que siempre existirá, alguien que esté dispuesto a pagar por él; y c) el derecho a la información libre y plural. Estas reinterpretaciones, parten de lo que Bobbio definió como territorio o frontera inviolable que constituyen los límites a las decisiones colectivas, aunque ésta sea mayoritaria (Bovero, 2008: 222-223)

Como vemos, existe una especie de cadena secuencial entre los derechos de las personas para poder aspirar a una democracia constitucional más sólida que inicia con los derechos sociales, para dar paso a los derechos de libertad y, finalmente, jugar las reglas del juego democrático en condiciones de igualdad. De tal suerte que, trasladar el discurso jurídico de la igualdad de los derechos humanos a la vida de las personas, implica admitir que, al existir una brecha de desigualdad en el goce y disfrute de los derechos sociales, en una especie de efecto dominó, los derechos de libertad también se verán afectados, propiciando una democracia frágil. Siguiendo la propuesta bobbiana,

“para ser real y no aparente, la democracia tiene que ser liberal (política) y social al mismo tiempo. Así como no es lógicamente posible concebir una democracia moderna que no se encuentre fundada en [...] “las cuatro libertades de los modernos” [...] tampoco puede considerarse plenamente democrático algún sistema en el que algunos derechos sociales (aquellos mínimos necesarios para la existencia de una vida digna) no se encuentren debidamente garantizados” (Bobbio 1999, citado por Salazar, 2007).

Como analizaremos en el siguiente apartado, cada una de estas condiciones y precondiciones de la democracia, adquieren una dimensión particular cuando realizamos el

análisis desde la categoría género ya que ésta, nos permitirá mirar que la construcción de las democracias actuales, así como el reconocimiento, garantía y ejercicio de los derechos humanos, no han escapado del sistema sexo-género, provocando desigualdades en el ejercicio de la ciudadanía entre unas y otros.

2. Democracia, género, ciudadanía de las mujeres y feminismos

A partir de la revolución teórico-social que propició el racionalismo del siglo XVII surge también la crítica y ética política contra la desigualdad entre mujeres y hombres, que siglo y medio después se denominaría feminismo. Es importante mencionar esto porque el feminismo ilustrado, que se desarrolló principalmente a mediados del siglo XVIII y que estuvo influenciado por el iusnaturalismo racional, contribuyó para lograr la Revolución Francesa, sin embargo, ésta dejó fuera a las mujeres de la naciente sociedad civil, incentivando el surgimiento del sufragismo (Serret y Méndez, 2011: 13-20), cuya demanda básica: el derecho a votar y ser parte de las decisiones colectivas, constituye, como se mencionó en el apartado anterior, la piedra angular de cualquier régimen que aspire a denominarse democrático, es la regla que impone una condición de igualdad como inclusión, señalando que toda la ciudadanía, sin distinción alguna debe gozar del derecho-poder de contribuir a las decisiones colectivas.

Por esta razón era necesario que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas para ser parte activa en la toma de dichas decisiones colectivas ya que, una vez conquistado este derecho, se abriría la posibilidad de exigir, en condiciones de igualdad respecto a los hombres, el goce y disfrute de otros derechos humanos, fueran estos políticos, de libertad o sociales, inherentes a la democracia constitucional, en tanto que constituyen las condiciones y las precondiciones de la misma.

La noción de sistema sexo-género nos ofrece una explicación para comprender la separación de los espacios público y privado y, de qué manera, su delimitación restringió de diversas formas la ciudadanía de las mujeres (Rubin, 2013; De Barbieri, 1991; Pateman, 1996), al confinarlas al ámbito privado. Con base en Gayle Rubin, el sistema sexo-género “es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (Rubin, 2013: 37), por tanto, la opresión que sostiene a este sistema es

producto de las relaciones sociales que lo configuran, no obstante, al ser producto de la actividad humana y no una determinación biológica, es posible su deconstrucción.

Al respecto, Teresita de Barbieri señala que el espacio público fue concebido como “el lugar de trabajo que genera ingresos, la acción colectiva, el poder... donde se produce y transcurre la Historia” (De Barbieri, 1991: 203), mientras que el espacio privado se concibió como “el de lo doméstico, del trabajo no remunerado ni reconocido como tal, las relaciones familiares y parentales, los afectos, la vida cotidiana” (De Barbieri, 1991: 203). Esta dicotomía de espacios organizó los sistemas sociales, las normativas, los espacios de competencia para las actividades económicas, políticas y culturales (De Barbieri, 1991: 220) propiciando representaciones sociales que reforzaron y justificaron la negación a la ciudadanía a las mujeres (De Barbieri, 1991: 211). No obstante, advierte que los cambios socioestructurales y la inserción paulatina de las mujeres en diversos ámbitos de la actividad humana, ha hecho que estas categorías dicotómicas resulten inoperantes para analizar las complejas relaciones entre los géneros. Sin embargo, esto no implica dejar de investigar aquellos ámbitos donde las mujeres continúan excluidas o limitadas para ejercer sus derechos y donde, además, los estereotipos de género se refuerzan constantemente para mantener dicha dicotomía.

La política es un espacio donde el ámbito jurídico ha jugado un papel importante para abrir espacios de acceso a las mujeres y dismantelar los estereotipos de género que insisten en relegarlas al ámbito doméstico. Metáforas como: los techos de cristal, techos de cemento y techos de billetes, así como el piso pegajoso, aportan herramientas analíticas para evidenciar diversas limitantes que obstaculizan la consolidación de una democracia sustantiva, dificultando que el ejercicio del poder político entre mujeres y hombres ocurra en condiciones de igualdad. Estas metáforas revelan lo tangible del sistema sexo-género, esto es, demuestran que las mujeres continúan siendo las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidados (niñez, personas adultas o enfermas) realizando dobles o triples jornadas laborales (éstas, dependerán de las condiciones materiales de existencia), sin dejar de mencionar la brecha salarial. Son, en conjunto, una serie de barreras sociales y autoimpuestas que parten de un desigual ejercicio de los derechos humanos (García Beaudoux, 2017 y 2018; D’Alessandro, 2016; Lagarde 2014).

Como sostiene Mónica Cejas, en el discurso de los derechos, el movimiento feminista ha insistido en mostrar que “la continua marginalización de las mujeres en las áreas económica, social y cultural, por un lado y su falta de representación en la vida pública y en la toma de decisiones por el otro, son caras de la misma moneda” (Cejas, 2008: 11). A lo largo del mundo, el proceso de reconocimiento y efectivo goce de los derechos de las mujeres para asegurar su participación política en condiciones de igualdad no ha sido un proceso lineal, dado que los avances, estancamientos y retrocesos han dependido de las coyunturas de cada contexto

Si consideramos que la ciudadanía es resultado de un proceso histórico en el que las personas paulatinamente gozan de garantías constitucionales inherentes a la forma de organización democrática y es, por tanto, un status conferido a quienes integran dicha comunidad política en la que adquieren derechos y obligaciones por igual, es posible distinguir al menos tres dimensiones de esta condición: la ciudadanía civil que incluye el conjunto de derechos vinculados con la libertad, protegen la seguridad de las y los ciudadanos y les permiten ser autónomos respecto al Estado; la ciudadanía política que expresa el derecho a votar para elegir a sus gobernantes y la posibilidad real de acceder a un puesto de elección popular y; la ciudadanía social que implica garantizar las condiciones mínimas de supervivencia y dignidad para todos los miembros de la comunidad en condiciones de igualdad (Asakura, 2012; Olvera, 2015; Salazar y Woldenberg, 2015).

Bajo este escenario, existe un vínculo ineludible entre democracia y derechos humanos, implica consolidar sociedades más justas y equitativas donde no exista ningún tipo de discriminación para que todas las personas puedan participar de las decisiones colectivas en igualdad de condiciones y, por tanto, poder ejercer su ciudadanía (Dalton, 2014: 17).

La construcción de la ciudadanía como la concebimos actualmente, ha sido resultado de la lucha política que han emprendido diversos grupos sociales, no siempre minoritarios como en el caso de las mujeres. Bajo esta mirada, cuando insertamos el género en el análisis, podemos sostener que el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres es una condición necesaria en cualquier democracia. Al integrar esta categoría analítica, diversas teóricas sostienen que el ejercicio de ciudadanía para las mujeres ha mostrado contrastes y desigualdades significativas respecto a los hombres a lo largo de la historia de la humanidad (Cejas, 2008; Pateman, 1995; Phillips, 1996). A partir de estas circunstancias, la ciudadanía

de las mujeres se ha catalogado en diversos momentos como una ciudadanía de segunda, tratando de evidenciar que sus derechos humanos no eran reconocidos y garantizados en la ley o bien, no eran materializados por los Estados.

La crítica feminista también cuestionó la noción de individuo ya que, en tanto categoría abstracta, universal y fundamento de la democracia moderna, desdibuja las diferencias entre las personas que muchas veces se traducen en desigualdades para acceder y ejercer sus derechos humanos (Pateman, 1996; Phillips, 1996; Scott, 2012). Los feminismos se han encargado de reconfigurar esta idea incluyendo a las mujeres, a la diversidad que existe entre ellas y las dificultades particulares que han enfrentado para ser consideradas como sujetos políticos. Esta apuesta por integrar diversas voces en la toma de decisiones colectivas está dando paso a una democracia incluyente, acorde con las dos primeras reglas mínimas que este régimen político demanda.

En este sentido, a partir del análisis histórico de las denominadas “olas del feminismo”, podemos reflexionar sobre quiénes y qué derechos se fueron demandando con el paso del tiempo y por qué ahora resulta necesario hablar de feminismos. Es aquí donde cobra relevancia la noción de interseccionalidad, ya que ha sido sumamente útil para evidenciar la diversidad entre las mujeres, de sus demandas y, por tanto, de la lucha por determinados derechos humanos, todos, constitutivos de la condición de ciudadanía.

Cabe mencionar que la categoría analítica de interseccionalidad fue propuesta por Kimberlé Williams Crenshaw en 1989, con ella puso de manifiesto que, al integrar raza y género en el análisis, era posible demostrar el vínculo que existe entre racismo y patriarcado, por ello, estudiarlas por separado, invisibilizaba la violencia particular que padecen las mujeres de color (Crenshaw, 2012: 88-89).

A partir de estas reflexiones, Mara Vivero Vigoya retoma dicha categoría y sostiene que la interseccionalidad es una “perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder” (Viveros, 2016: 2). Esta perspectiva ha permitido mostrar y reconocer las múltiples expresiones de sexismo que viven distintas mujeres y nos ha permitido entender que el carácter interseccional de la dominación implica observar que las mujeres son producidas por las relaciones de género, raza y clase y que justo a partir de estas diferencias y del contexto particular de cada una, van a experimentar y asumir dicha opresión de formas diferenciadas (Viveros, 2016: 8).

Es importante considerar estas nociones porque cuando reflexionamos sobre la ciudadanía de las mujeres en un contexto democrático, es imprescindible plantear que los derechos humanos inherentes a esta categoría se viven y se ejercen de manera diferenciada. Como señala Karina Bidaseca, “sexismo, racismo y explotación de clase constituyen sistemas interrelacionados de dominación y opresión que determinan la agencia femenina” (Bidaseca, 2010: 133). En este sentido, los análisis interseccionales que nos invitan a entrecruzar el género, con la raza, la clase, pero también con la edad, la etnia, la discapacidad, la identidad, entre otras diferencias, nos han llevado a plantear estudios sobre “contextos situados” e insistir en la importancia de reformular una democracia constitucional que, además, sea inclusiva. Son precisamente las experiencias situadas las que “han impulsado un nuevo discurso y una práctica política crítica y transformadora” (Curiel, 2007: 94).

Es por todo lo anterior que resulta significativo pensar a los múltiples feminismos como parte integral en la construcción democrática de un país, puesto que, desde su contexto, se han apropiado de su voz, de sus demandas y su lucha para ejercer sus derechos humanos. Los feminismos antirracistas y descoloniales han puesto de manifiesto que existen otras maneras, saberes y epistemologías de conocer y entender el mundo, de mirar las desigualdades entre mujeres y hombres, pero también de reconocer las desigualdades existentes entre las mujeres que coexisten en un mismo país, para poder así reducirlas en el mayor tiempo posible. Su postulado principal afirma que “no hay descolonización sin despatriarcalización” (Espinosa, 2014:11). Sostienen que todas las mujeres pasan por la condición de ser generizadas, pero esta condición no sucede de forma universal o abstracta ya que la clase y la raza tienen un impacto diferenciador.

A manera de síntesis, sus principales críticas y distanciamiento con ciertos feminismos occidentales, consiste en:

- 1) la dependencia al conocimiento feminista producido fundamentalmente en el norte global y las dificultades para la producción de una teoría latinoamericana de cuño propio atenta a la particularidad del sujeto feminista latinoamericano;
- 2) la institucionalización del feminismo, su complicidad con la agenda de la cooperación internacional y la lógica burocrática estatal de las democracias liberales;
- 3) el clasismo, el racismo, la heteronormatividad de las diferentes corrientes feministas.

La teoría decolonial pone en el centro de su análisis la raza, la clase y otras formas de clasificación social como elemento de exclusión simbólica y material (Espinosa, 2014: 20).

En este mismo sentido, los feminismos afroamericanos (Una declaración feminista negra de la Colectiva del Río Combahee, 1977; Davis, 1981; Bidaseca 2010; Curiel 2007), árabes e islámicos (El Saadawi, 1991; Mernissi, 1995 y 2003; Mohanty, 2020) y los feminismos chicanos (Anzaldúa, 2016; Moraga 1988; Sandoval, 1988) también han cuestionado “los estudios feministas occidentales sobre las mujeres del Tercer Mundo que colonizan discursivamente sus vidas y luchas” (Mohanty, 2020: 297). Han puesto de manifiesto que el trabajo feminista transcultural debe prestar atención a dos ámbitos: el primero de ellos es el de las micropolíticas de contexto, que encarna la subjetividad y lucha; y el otro, es el de las macropolíticas de los sistemas y de los procesos políticos y económicos globales (Mohanty, 2020: 298).

Considerando la diversidad de feminismos existentes, la apuesta es tender puentes donde los feminismos occidentales y los feminismos del Tercer mundo permitan a las feministas de ambos contextos crear lazos de solidaridad y donde el reconocimiento por la diferencia nos permita teorizar los problemas universales de una forma más integral con el fin de construir coaliciones y solidaridades transfronterizas entre las mujeres de diferentes comunidades e identidades. Así mismo, resulta necesario construir lazos sólidos entre el feminismo académico y la organización política y no perder de vista que el vínculo entre la economía política y la cultura, es determinante para cualquier forma de teorización feminista (Mohanty, 2020: 299-307).

Como señala Ochy Curiel, el feminismo negro contribuyó a completar la teoría feminista y la teoría del racismo al explicar que la triada racismo, sexismo y clasismo afectan a las mujeres. Por su parte, el feminismo chicano ha planteado una política de identidad híbrida y mestiza (Curiel, 2007: 95), ha trastocado las normas lingüísticas e incluso, han propuesto nuevos términos y categorías. Mientras que el feminismo indígena ha cuestionado las relaciones patriarcales, racistas y sexistas de las sociedades latinoamericanas y, al mismo tiempo, cuestiona los usos y costumbres de sus propias comunidades y pueblos que aún subordinan a las mujeres (Curiel, 2007: 99).

Desde una metodología dialógica, estos feminismos han cuestionado el soporte occidental y heteronormativo de la democracia y han evidenciado la interrelación de diversas

opresiones hacia las mujeres. Por ello, más que poner en jaque a la democracia constitucional, su crítica resulta benéfica para reestructurar y hacer más perfectible e incluyente este régimen político. Son justo a partir de sus demandas que los derechos humanos se han extendido y reconfigurado.

3. Hacia una justicia electoral de género

En el caso mexicano, los derechos contenidos en la Constitución de las personas indígenas, el reciente reconocimiento de las personas afromexicanas, los derechos de las personas LGBTTTQ, el cambio en la concepción del trabajo doméstico, por mencionar algunos ejemplos, son resultado de estas luchas políticas, algunas de ellas basadas en contextos situados, que están haciendo posible que la democracia constitucional mexicana se transforme, hasta que nuestras diferencias no se traduzcan en desigualdades para acceder y ejercer nuestros derechos humanos.

Como se ha advertido, diversos feminismos han cuestionado la utilidad de ciertas categorías para aplicarlas en el análisis de su contexto y, la de género no ha sido la excepción. Sus propuestas radican en entrecruzar el género con otras categorías para lograr un análisis más integral donde la opresión posee diversas aristas y no se trata únicamente de relaciones de poder basadas en la diferencia sexual o las relaciones entre los sexos (Curiel, 2011: 217).

Con base en lo anterior, nos encontramos frente a un escenario donde el género sigue siendo una categoría útil porque se entrecruza con las identidades de las personas e inevitablemente, trastoca el ejercicio de sus derechos humanos, “esta perspectiva ha abierto la posibilidad de ubicar culturalmente las experiencias de las mujeres y entender que el género no es una categoría universal, estable y descontextualizada” (Curiel, 2007: 101). En este sentido, desde una epistemología feminista, tendríamos que plantear cómo mejorar la democracia constitucional, en su ámbito procedimental (reglas de *quién* y *cómo* acceder al poder político) hasta su ámbito sustancial (garantía de derechos humanos para los y las ciudadanas, así como la separación de poderes). Desde el componente de constitucionalismo es necesario incentivar el tránsito de una cultura de la legalidad a una cultura de constitucionalidad a través del género.

Tomando en consideración la diversidad anteriormente señalada, el desafío de la justicia electoral implica dejar de lado cualquier pretensión elitista y androcéntrica, es decir,

impulsar una justicia electoral de género que haga frente a la colonialidad del poder y del saber (Curiel, 2007: 101) y cuyo fundamento y fin tenga en su base al principio constitucional de paridad.

En México, el principio constitucional de paridad no puede entenderse sin el movimiento feminista que desde múltiples ámbitos hicieron posible que esta exigencia se concretara en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 2014 y su carácter progresivo se ampliara en 2019.

En este sentido, la experiencia histórica nos ha mostrado que antes del principio constitucional de paridad, los derechos político-electorales de las mujeres avanzaron a “golpe de sentencia”, de ahí la importancia del actuar de las autoridades electorales jurisdiccionales, como última instancia para exigir justicia.

Por lo anterior, resulta relevante y necesario dar puntual seguimiento a las sentencias en torno al principio de paridad puesto que en este cúmulo de posibilidades y ambivalencias, la justicia electoral entendida como una función del Estado a través de la cual se dirimen y solucionan conflictos surgidos con anterioridad, durante o posteriormente a las elecciones, con relación a la renovación de los integrantes de los poderes públicos (Arreola, 2013: 17) cobra un papel fundamental, ya que de ella depende la protección de los derechos políticos de las y los ciudadanos.

Tomando como escenario el pasado proceso electoral los resultados preliminares muestran un avance cuantitativo respecto al número de gobernadoras, por primera vez en la historia de nuestro país 7 mujeres serán titulares del Poder Ejecutivo Local. A nivel Federal, la Cámara de Diputadas y Diputados será la más incluyente, puesto que 65 fórmulas estarán integradas por personas afromexicanas (6), con discapacidad (8), de la diversidad sexual (4), indígenas (37) y migrantes (10), así mismo, será la Cámara más paritaria con 248 mujeres que representan el 49.6% y 252 hombres que constituyen el 50.4 %.

Fortalecer una democracia incluyente implica impulsar acciones afirmativas para revertir desigualdades históricas y, en el mismo sentido, fortalecer la democracia paritaria requiere no dar ni un sólo paso atrás en exigir y cumplir el principio constitucional de paridad. Hay mucho que cuestionar y discutir respecto a los *limites de la paridad*, pero también respecto al papel de las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales.

Conclusiones

La vigencia de los estudios de género en la democracia constitucional mexicana responde al interés por identificar las desigualdades en el ejercicio de los derechos políticos, de libertad y sociales hasta lograr un piso parejo y estar así, en condiciones de igualdad para jugar, las reglas de juego democrático.

Considerando los elementos de la Democracia Constitucional, en México se han dado importantes avances por lo respecta al componente democrático, específicamente, por lo que refiere a las reglas del juego en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres para acceder al poder político. Sin embargo, si consideramos las condiciones para una democracia constitucional, es necesario que las mujeres sean parte de las decisiones colectivas y para arribar a ello, se requiere la garantía y ejercicio de sus derechos de libertad, pero también de sus derechos sociales, sólo así podremos estar en condiciones de fortalecer la democracia constitucional que se caracterice por ser paritaria e incluyente.

Como sostiene Pedro Salazar: “en la gran mayoría de las nuevas democracias la situación de las precondiciones nos orillan a la insatisfacción [...] la garantía efectiva de los derechos fundamentales sigue siendo una promesa incumplida” (Salazar 2007, 253), sin embargo, también afirma que “sólo a través del constitucionalismo será posible diseñar las garantías necesarias para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son las precondiciones de la democracia verdadera” (Salazar 2007, 253).

En suma, existe una relación intrínseca entre democracia constitucional, derechos humanos y género, los feminismos que se han presentado nos presentan el desafío de replantear la justicia electoral, cuyo enfoque deje de lado cualquier pretensión elitista y androcéntrica, es decir, que sea una justicia electoral de género que también haga frente a la colonialidad del poder y del saber (Curiel 2007, 101) y cuyo fundamento y fin tenga en su base al principio constitucional de paridad.

Sabemos que los derechos de las mujeres se conquistan y así como cualquier avance democrático, se deben defender y proteger todo el tiempo, porque siempre cabe la posibilidad de cualquier retroceso. Estar a la altura de nuestro tiempo requiere un compromiso con hacer real la paridad y la igualdad jurídica.

BIBLIOGRAFÍA

- Arreola, Álvaro. 2013. *La justicia electoral en México. Breve recuento histórico*. México: TEPJF.
- Anzaldúa, Gloria. 2016. *Borderlands. La frontera. La nueva mestiza*. Madrid: Capitán Swing Libros.
- Asakura, Hiroko. 2012. “Prácticas de ciudadanía sustantiva en el contexto migratorio transnacional: una visión de género”. En Serret 2012, pp. 175-203.
- Bartra, Eli. 2012. “Acerca de la investigación y la metodología feminista”. En Blázquez 2012, pp. 67-77.
- Bidaseca, Karina. 2010. “Mujeres blancas buscando salvar a las mujeres de color café de los hombres blancos y color café”. En *Perturbando el texto colonial. Los estudios (pos) coloniales en América Latina*. Buenos Aires: Editorial SB, pp. 129-144
- Blázquez, Norma, Fátima Flores y Maribel Ríos, coords. 2012. *Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones sociales*. México: UNAM-CEIICH-CRIM-Facultad de Psicología.
- Bobbio, Norberto. 1991. *El tiempo de los derechos*. Madrid: Editorial Sistema.
- _____. 2009. *Teoría general de la política*. 3ª. ed. Madrid: Trotta.
- Bovero, Michelangelo. 2013. *La protección supranacional de los derechos fundamentales y la ciudadanía*. México: TEPJF.
- _____. 2008. “Qué no es decidible. Cinco regiones del coto vedado”, *DOXA, Cuadernos de filosofía del derecho*, 31: pp. 217-226.
- _____. 2016. *Derechos débiles, democracias frágiles. Sobre el espíritu de nuestro tiempo*. México: INE.
- Cejas, Mónica, coord. 2008, *Igualdad de género y participación política: Chile, China, Egipto, Liberia, México y Sudáfrica*. México: El Colegio de México.
- Colectiva del Río Combahee. 1988. *Una declaración feminista negra de la Colectiva del Río Combahee*. En Moraga y Castillo 1988, pp. 172-184.
- Córdova Vianello y Pedro Salazar, coords. 2007. *Política y Derecho [Re] pensar a Bobbio*. México: UNAM-III-Siglo XXI

- Córdova, Lorenzo. 2007, "Bobbio y la edad de los derechos", En Córdova y Salazar, 2007, pp. 63-78.
- Curiel, Ochy. 2007. "Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista". *Nómadas*, núm. 26: pp. 92-101.
- _____. 2011. Los límites del género en la teoría y la práctica política feminista. En *El género: una categoría útil para las ciencias sociales*, coords. Luz Gabriela Arango Gaviria y Mara Viveros Vigoya. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Ciencias Humanas-Escuela de Estudios de Género, pp. 203-226.
- D'Alessandro, Mercedes. 2016. *Economía feminista. Cómo construir una sociedad igualitaria (sin perder el glamour)*, Buenos Aires: Penguin Random House Grupo Editorial.
- Dalton, Margarita. 2014. *Mujeres al poder. El impacto de la mayor representación de las mujeres en políticas públicas*. México: TEPJF.
- Davis, Ángela. 1981. *Mujeres, raza y clase*. Madrid: Ediciones Akal.
- De Barbieri, Teresita. 1991. *Los ámbitos de acción de las mujeres*. En Revista Mexicana de Sociología, pp. 203-224. México: IIS-UNAM.
- El Saadawi, Nawal. 1991. Precursores de la liberación de la mujer árabe. En *La cara desnuda de la mujer árabe*. Madrid: Editorial Horas y horas, pp. 227-243.
- Espinosa, Yuderlys, Diana Gómez y Karina Ochoa, eds. 2014. *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*. Colombia: Editorial Universidad del Cauca.
- Ferrajoli, Luigi. 2014. *Derechos fundamentales y democracia*. México: Miguel Carbonell.
- García Beaudoux, Virginia. 2017, De techos, suelos, laberintos y precipicios. Estereotipos de género, barreras y desafíos de las mujeres políticas. En *Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina*, eds. Flavia Freidenberg y Gabriela del Valle. México, UNAM-IIIJ-TECM, pp. 103-114.
- _____. 2018. Medios de comunicación, estereotipos de género y liderazgo femenino en América Latina. En *Mujeres en la política. Experiencias nacionales y subnacionales en América Latina*, eds. Flavia Freidenberg, Mariana Caminotti, Betilde Muñoz y Tomas Dosek. México: IECM-UNAM-IIIJ, pp. 119-141.

- Lagarde, Marcela. 2014. *Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas*. México: UNAM-Siglo XXI Editores.
- Lamas, Marta, comp. 2013. *El género. La construcción cultural de la diferencia sexual*. México: UNAM-PUEG- Porrúa
- Mernissi, Fátima. 1995. *El poder olvidado. Las mujeres ante un islam en cambio*. España: Icaria Editorial.
- Mohanty, Chandra Talpade. 2020. *Feminismo sin fronteras. Descolonizar la teoría, practicar la solidaridad*. México: UNAM-CIEG.
- Moraga, Cherrie y Ana Castillo, eds. 1988. *Esta puente, mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*. San Francisco CA: Ism Press.
- Narváez, José Ramón. 2017. “Las emociones judiciales y la importancia de su enseñanza: una visión infrarrealista”. En *Emociones y virtudes en la argumentación jurídica*, coords. Amalia Amaya, Maksymilian del Mar, et al., México: Instituto de la Judicatura Federal-Tirant Lo Blanch México, pp. 59-79.
- _____. 2018. “El necroderecho y los derechos humanos”, En *Derechos humanos, seguridad humana, igualdad y equidad de género*, coord. Rafael Sánchez Vázquez. México: CNDH. pp. 175-185.
- Olvera, Alberto. 2015. *Ciudadanía y Democracia*, México: INE.
- Pateman, Carole. 1995. *El contrato sexual*, Barcelona: Anthropos-UAMI.
- _____. 1996. *Críticas feministas a la dicotomía público/privado*. Barcelona: Paidós.
- Phillips, Anne. 1996. *Género y teoría democrática*. México: UNAM-IIS-PUEG.
- Rubin, Gayle. 2013. “El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política del sexo””. En Lamas 2013, pp. 35-96.
- Salazar Luis y José Woldenberg. 2015. *Principios y valores de la democracia*. México: INE.
- Salazar, Pedro. 2007, “Democracia: ¿formal o sustantiva? El problema de las precondiciones en la teoría de Norberto Bobbio”. En Córdova y Salazar, 2007, pp. 240-255.
- _____. 2013. *La democracia Constitucional. Una radiografía teórica*, 3ª. reimpr. México: FCE-IIIJ-UNAM.
- Scott, Joan. 2012. *Parité! Equidad de género y la crisis del universalismo francés*. México: FCE.

- _____. 2011. Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis? En *La Manzana de la discordia*, Enero-Junio, Año 2011, Vol. 6, No. 1: pp. 95-101.
- Serret, Estela, coord. 2012. *Democracia y ciudadanía: perspectivas críticas feministas*. México: SCJN-Fontamara.
- _____ y Jessica Méndez. 2011. *Sexo, género y feminismo*. México: SCJN-TEPJF-IEDF.

ARTÍCULOS EN LÍNEA

- Cortina, Adela. 2013. La conciencia moral: entre la naturaleza y la autonomía, Cuadernos Salamantinos de filosofía, Vol. 40, Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, pp. 249-262, disponible en <https://core.ac.uk/download/pdf/50606071.pdf> (consultada el 6 de junio de 2021).
- Crenshaw, Kimberlé Williams. 2012. Cartografiando los márgenes. Interseccionalidad, políticas identitarias, y violencia contra las mujeres de color. En *Cuerpos y sexualidades en la encrucijada*, coord. Raquel Lucas Platero Méndez, pp. 87-122, disponible en <http://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/upload/crenshaw-kimberle-cartografiando-los-margenes-1.pdf> (consultada el 6 de junio de 2021).
- Garzón, Ernesto. 1989. Algo más acerca del «coto vedado», N. 6, diciembre, *Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho*, pp. 209-213, disponible en <https://doxa.ua.es/article/view/1989-n6-algo-mas-acerca-del-coto-vedado> (consultada el 15 de octubre de 2020).
- Mernissi, Fátima. 2003. Sobre la autonomía del feminismo árabe, disponible en <https://laicismo.org/sobre-la-autonomia-del-feminismo-arabe/30206> (consultada el 5 de enero de 2021).
- Viveros Vigoya, Mara. 2016. “La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación”, octubre, México: Debate Feminista, pp. 1-17. Disponible en: http://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/2077 (consultada el 5 de enero de 2021).